

CONCLUSIONES 2ª JORNADA DE LOS DEBATES DE "RADIO ÁGORA" (EMA-RTV)

ESTRATEGIAS EUROPEAS FRENTE AL DESAFÍO DEL CAMBIO GLOBAL

La política europea de cohesión medioambiental y de lucha contra el cambio climático desde el punto de vista de las inversiones de cofinanciación realizadas a nivel territorial en proyectos locales ha resultado sustancial en los últimos quince años en la convergencia ecosocial en regiones comunitarias del sur de Europa como Andalucía. No obstante, de cara al futuro más inmediato los inminentes nuevos planes estratégicos plurianuales deben ser cuestionados y revisados al alza en dos ejes fundamentales como son el de la mitigación y adaptación a los efectos climáticos del cambio global y del aumento de la temperatura global del planeta.

Asimismo, esos planes han de ser reforzados en regiones de especial vulnerabilidad como Andalucía para lograr que los fondos estructurales incidan como palanca de transformación cualitativa poniendo al ciudadano en el centro de las acciones locales, también como elementos clave a la hora de establecer las prioridades particulares de cada zona de actuación. La dimensión mastodóntica de los fondos europeos y de su infinidad de programas operativos debe vertebrarse de modo más flexible en favor de una implementación más ágil y dinámica.

Los fondos de cohesión no han servido hasta ahora todo lo que deberían como capilarizadores de una dinámica más eficaz en la penetrabilidad de las políticas energéticas sobre el territorio, tanto rural como urbano. Los bajos niveles de implicación presupuestaria de los gobiernos estatales y autonómicos no han permitido aprovechar óptimamente esas ayudas, sobre todo en la mitigación de unos baremos urbanos de contaminación y polución provocados por las nocivas partículas en suspensión que según cifras oficiales de la Agencia Europea de Medioambiente causan anualmente hasta medio millón de muertes prematuras en los países de la Unión Europea.

LA CAPACIDAD DE RESILIENCIA DE LA NATURALEZA

Estamos atravesando un momento crítico como significa un punto de inflexión, porque las crisis también aportan oportunidades de cambio frente a los riesgos que se afrontan. Los síntomas ya son demasiado evidentes como para mantener un modelo de consumo inasumible. Ya ni los océanos de la tierra son capaces de ralentizar por más tiempo con su capacidad de absorción los estragos de la aceleración antrópica del cambio climático natural. Y pese a todo, los sistemas proporcionados por la propia Naturaleza van a seguir siendo los mayores reservorios de regeneración si se les permite actuar, porque ni la más avanzada tecnología supera en mitigación su capacidad de resiliencia.

Se empiezan a hacer ya las preguntas correctas por parte de una ciudadanía mundial cada vez más concienciada y conectada. Aún estamos a tiempo, pero hace falta mayor capacidad de acción, reacción y liderazgo. Es un asunto del cuándo y de a qué velocidad, no de qué ni de cómo. En ese sentido, el Green New Deal impulsado por la nueva presidencia de la Comisión Europea debe servir a modo de "reseteo" que introduzca un nuevo compromiso comunitario más decidido y contundente.

Informes tanto de la Unión Europea como de las Naciones Unidas determinan que alrededor del setenta por ciento del total mundial de emisiones de gases de efecto invernadero provienen de la actividad urbana, por lo que intervenir eficazmente sobre ella debe considerarse una prioridad en términos ecológicos. Sin menoscabar la importancia de las poblaciones rurales, hay que poner en valor el peso específico de las condiciones de habitabilidad urbana, ya que alrededor del setenta y cinco por ciento de los habitantes de la Unión Europea viven en ciudades. La mejora y reparación de las condiciones medioambientales en entornos urbanos afecta a la salud y calidad de vida de muchas personas que ocupan sus barrios, un enfoque de sostenibilidad que no sólo debe centrarse en grandes núcleos de población, también en ciudades de tamaño medio del extrarradio metropolitano o que actúan como cabeceras comarcales y que son las que dotan de servicios básicos a muchos pequeños municipios rurales o dormitorio.

MAYOR PROTAGONISMO DE LAS CORPORACIONES LOCALES

Habría que permitir que legislativa y administrativamente el régimen de las corporaciones locales adoptara un rol mucho más protagonista en la aplicación de las políticas medioambientales contra el cambio climático auspiciadas por la cohesión europea. Las actuales leyes restringen severamente la capacidad de gasto público para ayuntamientos que por ese motivo no pueden coparticipar en más programas comunitarios ni beneficiarse más de los fondos dispuestos por la Comisión Europea para hacer frente al desafío del cambio global en el propio territorio. La Comisión Europea puso en marcha en 2018 el Pacto de los Alcaldes para que las ciudades que no tienen iniciativas propias empiecen a desarrollar por sí mismas planes urbanos de energía sostenible orientados a aumentar la eficiencia y a reducir sus emisiones. La iniciativa aglutina en estos momentos cerca de siete mil municipios que se han beneficiado del seguimiento de una metodología común en la ejecución de un plan de acción monitorizado en sus resultados.

La dimensión urbana de la política de cohesión establece una serie de ejes cuyo orden de prioridad deciden las propias ciudades. Son objetivos temáticos que en 173 municipios españoles, muchos de ellos andaluces, se establecen en función de una estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado (EDUSI) que a partir de ahora debería equilibrar más sus esfuerzos de mitigación en favor de un incremento de los encaminados a la adaptación frente al cambio global, como ya hacen en entornos urbanos de los países europeos más desarrollados en estos temas y que son los que actúan como motor financiero de las políticas de convergencia comunitarias.

RECUPERAR LA DIMENSIÓN HUMANA DE LAS CIUDADES

Hay que recuperar el espacio público en las ciudades para beneficio de sus habitantes. Debe mejorarse la accesibilidad a los servicios de una población urbana cada vez más envejecida y la movilidad poniendo la peatonalización por encima de la automoción. El fenómeno de la gentrificación comercial y turística de los cascos históricos o de algunos barrios de moda es necesario contrarrestarlo con un impulso de la dimensión humana de las ciudades para que vuelvan a ser lugares de tránsito, intercambio y convivencia. Estas pautas también deben ser aplicadas estructural e integralmente en barrios vulnerables o desfavorecidos para que puedan cohesionarse económica, social y medioambientalmente con los mismos criterios de equidad ecológica y demográfica.

La administración local es el futuro para solucionar problemas de índole global. Sus gestores han de ir por delante incluso de las directrices marcadas por la propia Unión Europea en su política de estímulo e incentivación. Desde Bruselas se deben atender a sus iniciativas urbanas ascendentes e innovadoras, que en muchos casos ya son laboratorios participativos de propuestas ingeniosas e ideas de vanguardia capaces de procurar soluciones imaginativas a problemas concretos.

Como radiografía general, el papel de la Unión Europea en la transición energética ha sido tremendamente positivo en cuanto a sentar las primeras bases de su puesta en marcha. Entre otras causas porque sus directivas de eficiencia y directrices sobre cupos de renovables han logrado contrarrestar en parte los efectos negativos de las moratorias aplicadas por sus estados miembros en los cumplimientos de plazos sobre reducción de emisiones de CO₂ a la atmósfera. Gracias a esa normativa comunitaria se ha podido al menos seguir avanzando, aunque haya sido a un ritmo insuficiente en relación a otras ciudades de países europeos más desarrollados en transición energética como Alemania, Francia, Dinamarca o el Reino Unido que se han marcado la meta de ser energéticamente autosuficientes en un cincuenta por ciento de su consumo antes de 2050.

“NÚMEROS ROJOS” DE ESPAÑA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES

El primer gran "check point" europeo en materia de transición energética llega en 2020 con la revisión del objetivo en el establecimiento del veinte por ciento de la cuota sobre la demanda final de las energías renovables. La UE lo está cumpliendo en su media, pero países como España se encuentran en el 17,3 por ciento y en nuestro país respecto a 1990 en estas tres décadas se ha aumentado en un 17,5 por ciento el volumen de emisiones, cuando en Europa se ha reducido en un veintitrés por ciento. Cuando desde el Gobierno de la Nación se promete a Bruselas que en 2030 se alcanzará el referido veinte por ciento se está reconociendo públicamente un fracaso sin paliativos.

La nuestra va a ser la última generación que va a poder hacer algo por evitar sucesos irreversibles. La tecnología ya ha cumplido, tenemos las herramientas necesarias a día de hoy para generar energía limpia a coste menor que la que procura la industria basada en el uso de combustibles fósiles como fuentes generadoras. En esta cuestión el compromiso formativo e informativo de los medios de comunicación en la concienciación y popularización frente a la opinión pública resulta crucial, porque la gente tiene que saber que ya es totalmente factible para cualquiera generar su propia electricidad para su hogar y transportarse por medios respetuosos con el medioambiente.

La tecnología ya está disponible y no debemos permitir que sean los monopolios energéticos que concentran la oferta los que marquen los tiempos de madurez de la demanda y su salto definitivo a la descentralización distributiva. Los tres factores disruptivos ya se cumplen: abaratamiento de los costes de generación eléctrica entre particulares, capacidad de almacenamiento y autonomía de los vehículos de tracción eléctrica y facilidad de acceso a las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Las promesas gubernamentales contenidas en el Plan Integrado de Energía y Clima de cubrir en diez años un cuarenta y dos por ciento de la demanda energética con recursos renovables no puede quedarse en un documento ministerial o en un programa electoral, deben ser respaldadas sin ambages por un régimen regulador acorde a la urgencia del objetivo. No tiene sentido marcarse metas abstractas por ambiciosas que parezcan a 2050 vista, si no planificamos y cumplimos con las concretas propuestas para 2040, 2030 y 2020.

ELECTRIFICACIÓN DE LA DEMANDA Y VOLUNTAD POLÍTICA

La electrificación de la demanda es la vía más directa para lograr que sea la misma ciudadanía la que como pilar del consumo doméstico de energía consiga una provisión de emisión cero. Ya es un mero asunto de voluntad política y compromiso social tanto en la conversión energética particular como en la exigencia colectiva a nuestros representantes para que no dificulten ese imprescindible tránsito. La revolución de la energía verde en detrimento del modelo actual está en manos del comportamiento agrupado de esa demanda de los usuarios uno a uno.



Asociación de Emisoras Municipales y
Ciudadanas de Andalucía de Radio y Televisión



No hay tiempo de esperar a que los grandes conglomerados oligopólicos del petróleo, el gas, el carbón y la fisión térmica nuclear den ese paso. Ha llegado el momento de prescindir totalmente de las fuentes contaminantes y no renovables en la generación de energía. Patronal y sindicatos no pueden seguir defendiendo sectorialmente por supuestos motivos laborales y empresariales respectivamente la fabricación de motores diesel a cualquier precio, porque a este paso no vamos a ahogarnos por la subida del nivel del mar, antes nos quedaremos sin aire que respirar.

Por lo que se refiere a la insostenibilidad en el abuso que se hace del agua dulce como recurso natural finito, aunque no ocupe mediáticamente un lugar tan preponderante como la energía, los riesgos que comporta el agotamiento hídrico representan unas de las mayores amenazas ecológicas y medioambientales de cara a un futuro no muy lejano. Además del despilfarro doméstico, industrial y agroganadero que se hace, el control especulativo del agua la aparta de su soberanía universal como elemento de primera necesidad y la acerca peligrosamente a intereses capitalistas que pueden convertir su escasez en un mecanismo más de mercado sujeto a leyes de oferta y demanda. Es por ello que su gobernanza es un tema de extraordinaria importancia que no debe pasarse por alto. La privatización del suministro tiene que contar con la más enérgica oposición ciudadana, que debe exigir una remunicipalización de concesiones que garantice la escrupulosa transparencia y rendición pública de cuentas de su gestión.